centro bartolomé de las casas

PRONUNCIAMIENTO EN APOYO A LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA

Reconocemos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en el Perú a reunirse pacíficamente, expresar sus justas demandas y participar activamente en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas y el futuro del país. Esta movilización representa un importante ejercicio de deber cívico y participación, que debe ser respetado y fomentado. En tal sentido, a través de diversas formas de movilización social, algunas muy intensas y sostenidas, desde el mes de diciembre del año pasado a la fecha, se viene buscando recuperar el derecho de la gran mayoría de la población de exigir legítimamente los cambios de autoridades gubernamentales y parlamentarias, negados mediante el uso arbitrario de una precaria legalidad y del abuso de la fuerza represiva que ha privado de la vida a más de 60 peruanos y peruanas y ha involucrado a tantos otros en procesos judiciales poco claros e injustos.

Desde esa fecha el país está sumergido en una sombría etapa de su historia republicana, retomando las ya conocidas prácticas corruptas y autoritarias de la época fujimontesinista, dejando en preocupante evidencia que no se hizo lo suficiente por conducir y consolidar los cambios democráticos necesarios para que no se repita el secuestro del Estado por un sector político, avalado por grupos empresariales económicos y mediáticos.

La crisis actual no es meramente coyuntural, sino que es sistémica, con raíces profundas y estructurales en nuestra historia; mencionamos algunos aspectos que consideramos clave:

- Racismo institucionalizado contra grandes grupos de población, mal llamadas minorías.
- Ataques hacia instituciones democráticas y fundamentales de nuestra sociedad, como las comunidades campesinas y nacionalidades indígenas.
- “Terruqueo y *criminalizacion a la protesta”* normalizado para distorsionar justas demandas sociales y que invisibiliza actos de verdadero terrorismo, como los ejercidos por grupos violentos avalados por el Estado (“La Pestilencia” o “La Resistencia”.
- Persistencia de personajes y grupos nefastos de la época corrupta de los años 90, que intentan retroceder la poca institucionalidad democrática frágilmente construida luego de la caída de Fujimori en el 2000, sentenciado por crímenes de lesa humanidad, homicidio calificado con alevosía, secuestro agravado, peculado y otros actos de corrupción.
- Congreso sin legitimidad, con una desaprobación histórica y que legisla en contra de los intereses del país.

- Poder Ejecutivo ineficiente, mediocre y vinculado con personajes nefastos a los cuales esta vez el Congreso no cuestiona como parte de su alianza política.
- Desmantelamiento y copamiento de *funcionarios* de organismos tutelares de la gobernabilidad democrática, como la Defensoría del Pueblo, la SUNEDU o la Fiscalía de la Nación, esperando hacer lo mismo con la ONPE, el JNE y la JNJ.
- Violación sistemática a los derechos humanos de parte del Estado, a través de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, con saña hacia poblaciones racializadas principalmente surandinas y *hasta ahora no hay justicia.*
- Incremento de la precarización laboral y el avance de la informalidad *e inseguridad cuidadana* y las mafias y lavado, a todo nivel, incluyendo conductas violentistas y asesinatos (como en la minería y tala ilegal y los cultivos ilícitos de coca) acompañado de desamparo de la ciudadanía por parte del Estado.
- Rol desinformativo de los medios masivos de información, jugando un papel nefasto y crucial en la erosión del sistema democrático.
- Situación de crisis climática y *fenómeno del niño global* que afrontamos, al desamparo de un Estado ineficiente, cortoplacista e indolente frente a los efectos de esta situación glocal.
- Profundización de un sistema económico extractivista, que limita derechos, sume al país en la desigualdad y sacrifica territorios y personas para el enriquecimiento de unos pocos grupos de poder nacionales e internacionales.

Ante eso, nos sumamos a las voces que demandan con justa razón:

- Renuncia de la presidenta Dina Boluarte
- Adelanto inmediato de elecciones generales garantizando la plena autonomía del sistema electoral y la participación plural de la ciudadanía.
- Convocatoria de un referéndum para que la población decida de manera participativa si apoya la realización de una Asamblea Constituyente.
- Respeto irrestricto a los derechos humanos, juicio y sanción a los violadores y responsables de asesinatos, y justicia para las víctimas.
- Condena de todo abuso y vulneración del derecho ciudadano a la movilización social.
- Políticas para enfrentar la crisis económica y social desde los intereses de los sectores vulnerables de nuestro país

Hacemos eco de la preocupación de la ciudadanía consciente y organizada por generar los cambios necesarios que el país requiere. Apoyamos el derecho democrático a la movilización nacional convocada para este miércoles 19 de julio.

Cusco, 18 de julio de 2023